

SISTEMA POLÍTICO Y GESTIÓN POLÍTICA

José G. Vargas Hernández

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, México

Este trabajo tiene como objetivo analizar las implicaciones de la política en las variables del sistema político y la gestión política, para lo cual se inicia repasando algunos elementos del sistema político, la secularización de la cultura política, la gestión política y la informalización de la política. Se consideran algunas de estas implicaciones para el caso específico de Latinoamérica. Finalmente, en la discusión, se delimitan algunos de los retos.

Palabras clave: Gestión política, política, sistema político.

This paper has the aim to analyze the implications of politics in the variables of the political system and public management, for which it begins reviewing some features of the political system, the secularization of the political culture, political management and the informalization of politics. There are some considerations of these implications for the Latinoamerican specific case. Finally, in the discussion, there are delimited some challenges.

Key words: Political management, politics and political system.

1. INTRODUCCIÓN

La filosofía política supone un continuo entre el orden y el conflicto, no es univalente sino ambivalente porque sus contenidos implican tensiones no radicables entre orden y conflicto, estructura y sujeto, institución y acción, que son expresiones de movimientos de dimensiones constitutivas de la política. Desde una perspectiva de la teoría política institucionalista, la política es considerada solamente como orden, como la doctrina de Hobbes excluye procesos fuera de la institucionalidad, y si solo se considera como política los momentos en que el orden es perturbado, bajo el es-

quema de las teorías conflictivistas, como en el caso de una persistente amenaza de guerra, pierde la referencia y el carácter constituyente de la acción política.

Pero si se concibe la tensión entre ruptura y creación, considera las dimensiones de orden y perturbación, como en el caso de la continuidad del orden opresivo o bien la emancipación. La política emancipatoria rompe con la continuidad de las instituciones opresivas mediante la reformulación de la cuestión democrática en referencia a las demandas de igualdad de actores políticos que intentan transformar el orden impulsados por imperativos éticos.

Para Rinesi (2003), “[...] la palabra ‘política’ no es ambivalente porque esté necesitando una ‘definición’ más precisa, sino porque aquello que nombra involucra una tensión inerradicable. [...]” Su ambigüedad no es un defecto, sino expresión del movimiento real de aquello que designa. La vida de las sociedades “[...] no se presenta nunca bajo la forma de una oposición dicotómica entre un ‘polo’ de instituciones establecidas y ‘poderes constituidos’, y otro ‘polo’ de prácticas instituyentes y ‘poderes constituyentes’, sino que se manifiesta siempre bajo la forma de un proceso permanente, de un movimiento incesante y una tensión ineliminable entre esos dos extremos”.

Para Rancière (1996), la política distorsiona el interior de las comunidades mediante la perturbación de sus partes cuya existencia la comunidad exige pero bajo la condición de su no-reconocimiento. La política se constituye sobre el *factum* democrático basado en la actualización de la igualdad última como premisa del orden social, una igualdad que no es política pero que se exhibe en seres poseedores de loggos capaces de comprenderse mutuamente. La política como actividad de irrupción del orden establecido, en el concepto de Rancière (1996), implica modos de subjetivación desidentificadores capaces de producir multiplicidades de funciones e identidades colectivas en el orden constituido para ser reconocidos en la esfera pública. Pero la política como proceso organizado también es apertura para la propuesta de alternativas y proyectos comunitarios.

La democracia se identifica con la política como una manera de ser de lo político y un modo de subjetivación de lo político para interrumpir el orden de una comunidad por un actor que se define en una identidad colectiva para disputar el espacio de poder. Hay democracia si hay una esfera específica de apariencia del pueblo. Hay democracia si hay actores específicos de la política que no son ni agentes del dispositivo estatal ni partes de la sociedad, si hay

colectivos que desplazan las identificaciones en términos de partes del Estado o de la sociedad. Hay democracia, por último, si hay un litigio dirigido en el escenario de manifestación del pueblo por un sujeto no identitario.

La lógica de la acción política crea tiempos y espacios autónomos en función más que de la contingencia, de la fidelidad a los acontecimientos (Badiou, 2000), es decir, algo imprevisible que perturba el estado de la situación y permite a quienes le son fieles mantenerse a distancia del Estado y medir su poder. Los contrapoderes son lazos, experiencias alternativas, solidaridad que se crea entre la gente. Los contrapoderes son las múltiples instancias en las que se desarrolla la política.

2. SISTEMA POLÍTICO Y SECULARIZACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA

Las sociedades modernas tienen como características la diferenciación social, la secularización de la cultura política y un sistema político. El diseño institucional de un país es determinante para su desarrollo económico, social y político y condicionan las consecuencias del sistema político. Las instituciones son el conjunto de reglas del juego político que se relacionan con las formas de interacción de los actores y de las organizaciones que integran un sistema político, por lo que el cambio organizacional está relacionado con el cambio de dichas reglas de juego que condicionan las formas de acceso al poder y las relaciones de los ciudadanos con los gobernantes. Los arreglos institucionales delimitan en forma contingente el juego político generando oportunidades, restricciones y riesgos al desarrollo.

Hasta ahora poco se ha estudiado desde un enfoque transdisciplinario y holista el sistema político en general y el papel del gobierno en la sociedad industrial en particular.

El sistema político constituido por las instituciones públicas y los partidos políticos es autónomo en su actividad política en la que participa la ciudadanía, y puede ser vehículo de intermediación entre el Estado y la sociedad civil. El procesamiento de las demandas sociales por el sistema político bajo un esquema de competencia por recursos que son escasos da lugar a una mejor distribución de la riqueza económica y poder político, una integración de las pluralidades.

En la complejidad de las interacciones entre el sistema político y la sociedad se delimita el "Buen Gobierno". Para facilitar la cooperación a través de un marco normativo se requiere o acuerdo entre los principales operadores y actores del sistema político y la afinidad de programas políticos de las diferentes agencias de cooperación. Cuando la gente pierde la fe en su gobierno, a largo plazo se pierde la confianza en el sistema político.

La estabilidad y el cambio incremental son característicos de un sistema político en equilibrio. Una sociedad dispuesta a aceptar las decisiones de gobernantes y del sistema político y sus productos, dentro de las reglas institucionales, constituye el mejor indicador de la gobernabilidad alcanzada. Por lo tanto, la gobernabilidad es un atributo de la sociedad. La gobernación es el conjunto de intervenciones de los actores políticos y sociales que predicen el establecimiento de las pautas de interacción en un sistema político.

El desarrollo político o *governance* ocurre en todas las instancias del sistema político y orienta los cambios con fundamentos en la democracia liberal. Un sistema político liberal fuerte que se oriente hacia la democracia, no necesariamente requiere de una sociedad civil también fuerte pero sí apoyada en valores liberales que fortalecen las estructuras políticas, de tal forma que tienda a equilibrar las diferencias económicas y sociales que crea el mercado.

No obstante, desde una perspectiva procedimental, la democracia liberal representativa no satisface los requerimientos de un sistema político democrático en la que todos y cada uno de los miembros de la comunidad participan activamente en los procesos de elaboración de normas. Esta conceptualización de democracia liberal representativa es contraria en la actualidad cuando los ciudadanos no participan en la elaboración de normas que luego están obligados a cumplir.

La economía de mercado es un sistema político-económico que constituye la antítesis de una sociedad en donde se dé prioridad a lo social y político por sobre lo económico porque organiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que requiere una sociedad. March y Olsen (1995) critican este enfoque aduciendo que los intercambios ocurren entre actores desiguales en poder por lo que no siempre son libres y buscan maximizar la utilidad, el sistema político basado en el intercambio económico tiene efectos morales perniciosos que debilitan los equilibrios de la gobernabilidad democrática como resultado de incentivar el beneficio egoísta.

Las instituciones y los patrones de acción de un sistema político deben ser congruentes con la cultura política nacional (Almond y Verba, 1963, 1980). Esta congruencia entre la cultura política y el sistema político adquiere importancia en la nueva ola democratizadora, la cual es una oportunidad para analizar y evaluar aspectos como la formación de la identidad, la formación de culturas políticas y su conexión con las normas y conductas políticas.

Una conceptualización de lo que es cultura política, de los elementos y sus interrelaciones es necesaria para el análisis institucional en cualquier sistema político, de tal forma que existe congruencia entre estas variables en muchas naciones que están en proceso de democratización. Existen

varias definiciones de cultura y por ende de cultura política, y por lo tanto, la teoría cultural es una herramienta predictiva. La cultura política, sostiene Orozco (2001) hace referencia a aquel sistema de creencias, actitudes y prácticas que posee una población sobre el mundo que le rodea. Una cultura política democrática cree en ciertos valores que propician la equidad, la participación, la tolerancia, el sentido de igualdad política, la confianza social y la solidaridad".

Como variable de la política, la cultura política es entendida por algunos analistas como esencial, mientras que para otros es residual en el análisis de los patrones culturales de la conducta política. El estudio de la cultura política se fundamenta en encuestas de opinión pública.

La cultura política toma forma específica en cada nación como un producto a largo plazo de la historia. La cultura así llamada conforma un conjunto de modos de vida de las naciones. Existen varias culturas democráticas que pueden ser delimitadas a partir de los elementos de la cultura política. La postmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

La implantación de un sistema democrático liberal requiere de cultura política e instituciones. El surgimiento de nuevas culturas políticas bajo el concepto de "Nueva Política", implica que los actores sociales y políticos adquieren nuevos símbolos y medios para dar lugar a nuevas formas de identidad ciudadana y de participación política. Para implementar este proyecto se requiere del cambio institucional con

una nueva cultura política en la que se involucren los principales actores.

3. GESTIÓN POLÍTICA Y PARTIDOS POLÍTICOS

Como alternativa a la controversia entre los neoliberales que procuran más mercado y los intergubernamentalistas que buscan una mayor participación de estado, surgen las estructuras de redes de las sociedades que involucran en su diseño las estructuras de los mercados, los actores privados (organizaciones no gubernamentales, empresas, *clusters*, redes de gestión política, etc.) y los Estados en nuevas formas de gobernabilidad, tales como las interacciones entre los emplazamientos locales, nacionales y globales, las alianzas translocales.

En las redes de gestión política global interaccionan actores privados y públicos que forman estructuras horizontales de cadenas globales de valor agregado y constelaciones transnacionales con estructuras multiniveles, que como formas de *governance* influyen en los flujos transfronterizos de inversión, tecnología, producción, distribución y consumo. Estas redes globales de gestión política se caracterizan por constelaciones transnacionales formada por agentes privados y públicos heterogéneos que colaboran bajo una diversidad de estructuras de *governance* que permiten la multiplicidad de niveles y ámbitos geográficos.

La institucionalización de los partidos es un elemento esencial para obtener una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos son un medio de representación que afectan la gobernabilidad, y por lo tanto el sistema democrático, de tal forma que una buena representación promueve la gobernabilidad democrática, aunque no siempre lo que es bueno para la democracia es bueno para la gobernabilidad (Coppedge, 2000).

Por eso resulta cada vez más difícil actualmente encontrar diferencias reales entre los partidos oficialistas y de la oposición en aquellos países que han adoptado el *Golden Straitjacket*, sus opciones políticas se ven reducidas a Pepsi o Coca – hacia leves matices en el gusto, leves matices en las políticas, leves alteraciones en el diseño para incorporar las tradiciones locales, algunas concesiones aquí o allí, pero nunca ninguna desviación importante del núcleo duro de las normas de oro.

La fuerte presencia tradicional de los empresarios en los partidos políticos en sistemas conservadores, encuentra su contraparte en la organización política de los trabajadores en las democracias sociales. Algunos de estos nuevos movimientos sociales no solamente mantienen conexiones internacionales con movimientos similares en otros países, son que también mantienen ligas con partidos políticos progresistas, agencias no gubernamentales internacionales y organizaciones religiosas internacionales con quienes desean formar alianzas a fin de promover sus temas específicos así como metas más generales de justicia social, redistribución económica y democratización política

La dimensión social y pública de la política tiene como referencia directa el poder estatal. Los partidos políticos están cada vez más alejados de la ciudadanía y la centralización del poder político es un síntoma más de malestar que se expresa en demandas por una ciudadanía de la política que procede desde ciertos grupos independientes a los mismos partidos políticos.

La ciudadanía de la política construye un discurso alternativo al del Estado hegemónico que pretende acotar al mismo poder político vigilando su comportamiento y que coadyuven en sus tareas y legitimen sus acciones, con pretensiones de que asuman directamente funciones del mismo gobierno. Los límites de la legalidad no son los mimos que los de lo legítimo.

El sistema de partidos políticos entra en crisis y son rebasados por una sociedad civil más demandante y participativa, y por los medios de comunicación que se asumen como actores políticos para servir de intermediarios en las demandas de la sociedad. La principal causa de la crisis de los partidos políticos es el surgimiento de formas no democráticas de legitimación que los vuelve incapaces de promover los cambios sociales. La crisis de los partidos políticos se manifiesta en la crisis de la democracia representativa formal como expresión de la soberanía popular ejercida por un pueblo que no es consciente de que la soberanía le pertenece y debe ejercerla a través de sus representantes.

La ambigüedad en la definición ideológica y política de los partidos y organizaciones políticas limitan los alcances de la democracia formal, porque excluyen a importantes estratos sociales que no coinciden con causas específicas. Las disfunciones de la democracia deslegitiman la autoridad, sobrecargan y desequilibran la acción gubernamental, fragmentan los partidos políticos y estimulan el “parroquialismo nacionalista” e inciden en la falta de gobierno y puntualizan la necesidad de *governance* o gobernanza (Prats, 2001) para lograr la gobernabilidad.

El sistema de partidos no ha podido sustituir las funcionales del presidencialismo como árbitro para la resolución de conflictos y disputas que surgen entre los diferentes actores con intereses económicos, sociales y políticos. En primer término hay que considerar las diferencias que presenta el mismo sistema presidencialista en diferentes realidades si consideramos las atribuciones y poderes constitucionales del presidente, su relación y control con los partidos políticos y el apoyo que recibe, los poderes legislativos, los poderes reactivos y proactivos para modificar el *status quo*. La fragmentación y dispersión ideológica, política y organizativa de los movimientos sociales de resistencia ha provocado una implosión del pragmatismo al interior de

los partidos políticos cuyos efectos supeditan la democracia electoral a los intereses y prerrogativas de los grupos de la elite político burocrática que tratan de mantener el poder estatal.

El debilitamiento de los partidos políticos está condicionado por los arreglos institucionales que delimitan los mecanismos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de decisiones políticas.

Los políticos que quieren permanecer en su puesto emplean políticas que los conducen a resultados de corto plazo pero que pueden tener funestas consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, los procesos de la administración pública se sustraen de los manejos políticos que sólo atienden a buscar los beneficios de grupos y facciones políticas en detrimento del beneficio colectivo. La difusión de la corrupción política cambia el modo de cumplir esta función. Una capacidad de generalizar las demandas particulares en términos ideológicos o programáticos, de manera que obtengan, dentro de ciertos límites, el mayor consenso posible.

4. IMPLICACIONES EN AMÉRICA LATINA

Las instituciones de los sistemas políticos establecidos en Latinoamérica no tuvieron las capacidades para el establecimiento de una autoridad efectiva capaz de separar los beneficios privados que proporcionaban de los beneficios de carácter social, con lo cual se reforzaba las conductas patrimonialistas. Los instrumentos del institucionalismo se aplican a la ciencia política en el análisis de los procesos de disolución como una inevitable acción de diferenciación social latinoamericana.

En América Latina altos niveles de crecimiento económico alcanzados bajo el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, están asociados a un sistema político caracterizado por un autoritarismo burocrático. En América Latina se construyó el modelo de Estado subsidiario

en un contexto de dictaduras que reprimen el disenso mediante el control concentrado de los medios de comunicación.

La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochenta y noventa. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

El programa político de gobernabilidad democrática propuesto para los Estados latinoamericanos a finales de los noventa, se orienta a alcanzar la estabilidad de las instituciones políticas y sociales a través del fortalecimiento de las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad civil, tales como los partidos políticos, con capacidad para eliminar las barreras existentes entre la sociedad civil y el Estado. Este programa de gobernabilidad busca la promoción de la política democrática orientada a la formación de una opinión pública mediante una regeneración de la vida ciudadana capaz de encausar los intereses y derechos de la sociedad civil que el mismo Estado reconoce.

El debate gira en torno a si existe una relación de causalidad entre el régimen y la democracia y si las características y factores del diseño institucional del régimen

parlamentario funcionan mejor que las democracias presidencialistas, las cuales se concentran en su mayor parte en Latinoamérica donde las diferencias socioeconómicas y políticas son muy marcadas. Una democracia con estas limitaciones crea inestabilidad y limita su calidad, como es el caso de los países latinoamericanos.

Uno de los elementos más impresionantes de la escena política contemporánea es la alta responsabilidad de los gobiernos a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población a pesar de los mecanismos formales de la política democrática que se establece en la región latinoamericana. Además, este nuevo orden político democrático es caracterizado como contingente y coyuntural en Latinoamérica, se fundamenta en el consenso social a partir del desarrollo histórico-cultural de la configuración del sistema de partidos.

Weber por ejemplo sostuvo que el sistema jurídico de los países avanzados europeos son más avanzados que los de otros países y esa era la base de su desarrollo, perdiendo la idea de que las legislaciones son interpretadas de acuerdo a las diferencias en la cultura legal de los aplicadores, la cual por ejemplo, en los países latinoamericanos se mezcló con lo político. De acuerdo con lo anterior, Dalton (2002) argumenta que en América Latina ha existido siempre una excesiva instrumentalización política de los marcos jurídicos de forma tal que no existe siempre una clara diferenciación y en la realidad lo que se presentaba era una subordinación a las luchas y estrategias políticas.

Bajo un esquema noinstitucionalista, la democracia latinoamericana es considerada más como un instrumento de la tecnología política que disuelve el diálogo social para convertirlo en política de un nuevo orden público. La estabilidad política y el control de la corrupción en Latinoamérica son indicadores del capital institucional, por ejemplo. Los elementos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas

para la promoción de la gobernabilidad y la democracia en Latinoamérica comprenden la consolidación de la gobernabilidad democrática más allá de las elecciones, el fortalecimiento de las instituciones de la gobernabilidad democrática, promoción del Estado de Derecho mediante la separación de poderes, el apoyo a la sociedad civil con atención particularizada a las organizaciones no gubernamentales, grupos de educación cívica, centro de estudio y desarrollo de políticas, medios de comunicación independientes y sindicatos (Santiso, 2002).

En América Latina, la gobernabilidad democrática es una construcción que Prats (2001) delimita como la que trata de que la transición y consolidación democrática sean gobernables y mejoren el desempeño económico, social y político a tal grado que se evite la regresión al autoritarismo. La gobernabilidad en América Latina trata de que la "transición a la democracia y la democracia misma sean gobernables", evite la "regresión al autoritarismo" y consolide el sistema democrático (Prats, 2001). Así la gobernabilidad democrática es una construcción para los procesos de la democracia latinoamericana que experimentan dificultades para su consolidación y serias amenazas de "regresión neo-autoritarias".

Por otro lado, se presenta una tendencia de descontento creciente a estos regímenes entre las clases populares que han recibido pocos de los beneficios y entre los críticos de los regímenes de la derecha y sus aliados en las fuerzas armadas quienes temen que incluso la democracia limitada que tiene lugar en Latinoamérica haya ido más allá.

De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas como en el caso de la región latinoamericana. En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, po-

lítica y social en Latinoamérica estuvo influido por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. En la lógica de los procesos de globalización, los Estados latinoamericanos compiten por recibir los beneficios de la apertura comercial, la atracción de inversiones extranjeras y la transferencia de la propiedad mediante privatizaciones de las empresas públicas a las elites capitalistas locales que se convierten en intermediarios de las grandes corporaciones transnacionales.

La complejidad de la realidad social de la Latinoamérica contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías políticas, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. Sin embargo, un grado considerable del poder del Estado y la burocracia gubernamental autoritaria todavía permanece en muchos países de Latinoamérica.

El concepto de democracia delegativa acuñado por O'Donnell (1994) para caracterizar a las democracias latinoamericanas como estructura y proceso que debilitan las instituciones públicas democráticas, la representación de los actores estratégicos es escasa y concentran el poder político en la persona del presidente electo. Los elementos de la democracia delegativa contribuyen a la fragilidad de las instituciones y a la inestabilidad del sistema político, a diferencia de los elementos formales de la democracia liberal. Este mecanismo de sustitución de la democracia formal explica la distribución desigual de la riqueza en América Latina. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades latinoamericanas inevitablemente conduce a un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

De acuerdo a los análisis de Prats (2002), en América Latina existe una "brecha institucional" con relación a otras regiones

del mundo que obstaculiza el crecimiento económico y su desarrollo social y político. Entre algunos de los factores que influyen negativamente en la implantación de un Estado de Derecho, y que caracterizan al Estado Latinoamericano, Dalton (2002) señala entre otros, en el ámbito político, una soberanía débil debido a la falta de un monopolio efectivo de la fuerza del Estado sobre el territorio, falta de separación entre lo político y lo jurídico que sujeta la práctica jurídica a la lógica política y a las presiones e intereses de los políticos.

El signo de fracaso del nuevo modelo está presente en la mayor parte de los países latinoamericanos en donde la política de apertura unilateral y acciones privatizadoras ha culminado en problemas financieros que enviaron a los países a crisis económicas. En los países de Latinoamérica y el Caribe esta crisis está marcada por la falta de un proyecto alternativo de desarrollo al neoliberal de las instituciones financieras internacionales y porque el desarrollo democrático está marcado por una creciente falta de gobernabilidad y pérdida de la confianza en sus instituciones.

La izquierda y las fuerzas progresivas en Latinoamérica se han debilitado y desorientado por los mayores desarrollos globales, tales como los movimientos revolucionarios, así como sus propias fallas para desarrollar una estrategia efectiva que movilice a la población contra el proyecto neoliberal de los regímenes civiles de centro derecha en la región. A través de Latinoamérica se pueden encontrar movimientos a ras de suelo que emerge de los grupos étnicos, comunidades indígenas y los sectores más explotados de la población como el caso de la rebelión indígena de Chiapas y la conciencia étnica del movimiento de Afro-brasileños.

La mayoría de los partidos y movimientos progresistas en Latinoamérica reconocen que están seriamente lesionados por sus fracasos para ofrecer una alternativa efectiva al opresor proyecto neoliberal

y como resultado establecen un diálogo internacional dirigido a desarrollar una nueva identidad y una estrategia para la nueva era. Los partidos políticos más controvertibles, las organizaciones sindicales y campesinas, los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica se han establecido como fuerzas tanto en el ámbito local como nacional, a pesar de que muchos de estos movimientos tienden a ser clientelistas con relaciones jerárquicas que son una copia del medio ambiente político basado en el patronazgo y el caciquismo.

Sin embargo, las fuerzas progresivas políticas pueden cambiar el desarrollo de los acontecimientos en dirección de una mayor democracia política, mejorar los estándares de vida y justicia social si pueden formular una estrategia efectiva que les permita tener éxito para movilizar a la mayoría de la población en esta dirección. Las fuentes alternativas de información disponibles son una característica de la democracia política en donde el poder político proviene de los ciudadanos quienes ejercen un control imperfecto sobre el comportamiento que busca el beneficio propio de los actores políticos.

A pesar de la retórica neoliberal en los círculos de negocios y gobiernos contemporáneos latinoamericanos existe una interdependencia y complementariedad necesaria entre el Estado y el Mercado como en cualquier sociedad capitalista. En Latinoamérica, la estrategia de renovación política centrada en la acción de nuevos actores no ha podido participar en la implantación y consolidación de un sistema más democrático que de cumplimiento a las promesas de una democracia más justa en lo social y más profunda en lo político. Una mayor libertad política e igualdad social requiere de nuevas estructuras y arreglos de las instituciones políticas.

La gobernabilidad democrática en América Latina requiere la construcción de una cultura cívica sobre la base de un proyecto de ciudadanía participativa y de

integración de la comunidad nacional que promueva el desarrollo humano.

5. DISCUSIÓN

La democracia necesita de una ciudadanía activa en los asuntos públicos y en la política para alcanzar altos niveles de legitimación y para convertirse en la fuerza que guía a una sociedad. La ideología capitalista se ha visto fortalecida con las olas de inmigrantes que cambian su sufrimiento por un individualismo marcado y por una ideología liberal dominante que retrasa el surgimiento de una expresión política de conciencia de clase y de ciudadanía activa aunque fortalece las identidades étnicas para una mayor manipulación política.

Así, la desigual distribución de los beneficios económicos del mercado repercute en el poder social y político, de tal forma que el mercado debilita las bases de la ciudadanía política. Las banderas de la "Nueva Izquierda" son la democratización de las instituciones y una "ciudadanía activa" de la sociedad global, de una ciudadanía que identifica al individuo como el elemento fundamental e irreductible del poder político.

Régimen es el conjunto de las normas explícitas o implícitas que definen a los actores políticos que tienen más relevancia en los diferentes canales y los recursos con que cuentan en posicionamiento activo y político. La democracia es en este sentido un régimen político. El régimen político está formado por el conjunto de reglas y procedimientos formales e informales que delimitan la complejidad de las interrelaciones entre los diferentes actores políticos y sociales estratégicos y agentes económicos, las formas en que establecen sus expectativas, se toman y se implantan las decisiones y dirimen sus conflictos, etc.

El régimen político de un país está determinado por los procesos de institucionalización del conjunto de reglas y proce-

dimientos que posibilitan los procesos de toma de decisiones y la solución de conflictos entre los diversos actores económicos, sociales y políticos. El crecimiento económico mantiene y refuerza el régimen político que conduce al desarrollo.

El buen gobierno propicia beneficios que facilitan la participación ciudadana, mantienen la estabilidad política, garantizan la transparencia y la existencia de un estado de derecho que crea confianza entre los ciudadanos (Orozco, 2001). Durante los periodos de transición, no se puede eliminar del todo la inestabilidad política y por lo tanto se retrasa la creación del marco económico. La estabilidad política y el control de la corrupción son metas que pueden lograrse mediante instituciones compatibles con democracias participativas con procesos de descentralización política y fiscal.

La sociedad autoritaria limita el alcance de un orden político basado en la cooperación social y desarrolla un sistema de intercambio político donde se otorgan derechos y privilegios por lealtad y apoyo. El cambio político democrático establece compromisos que instrumentan la solución de conflictos. La dinámica de cambio que incorpora las organizaciones establecidas y emergentes y los procesos de poder que involucran una contención transgresora y una autoridad intencionalizada dentro de la política prescrita. Por lo tanto, la política requiere ser autónoma respecto de lo económico y social para que dé como resultados soluciones convencionales que sean ejecutables y realizables por los agentes políticos.

Las teorías del cambio de cultura política tratan de explicar el cambio institucional. El estudio entre el cambio cultural y la congruencia con el cambio institucional implica el análisis que sugiere que la cultura puede crearse y transformarse. La teoría de la autoridad-cultura de Eckstein (1996) sostiene el papel dinámico de la cultura en los procesos de cambio político. La teoría

de la cultura cívica sostiene que la cultura política de una nación tiene una influencia independiente en el comportamiento social y político que los miembros de la sociedad reconocen y siguen incluso cuando no la comparten (Almond and verba, 1963, 1980).

El reto permanece en la urgente necesidad de desarrollar instituciones políticas con nuevas tecnologías sociales capaces de incorporar a los sectores informales de la economía a los beneficios de los procesos de globalización económica en franca contradicción al modelo de desarrollo hegemónico actual. Repensar el sistema democrático desde la perspectiva de la creación de un sistema de organización complementario de socialismo y democracia libertaria que reconozca a los individuos como los sujetos activos de la política, en ejercicio pleno de su libertad y de su igualdad. Sin igualdad la democracia languidece.

Además, se requiere del conjunto de arreglos institucionales formales e informales que definan las facultades, relaciones y mecanismos de control del comportamiento entre los diferentes niveles políticos del gobierno.

8. REFERENCIAS

- ALMOND Gabriel and Sidney VERBA, (eds.) (1980). *The civic culture revisited*. Boston: Little Brown.
- ALMOND Gabriel and Sidney VERBA (1963). *The civic culture*. Princeton: Princeton University Press.
- BADIOU, Alain (2000) "Movimiento social y representación política", Conferencia 24 y 25 de abril del 2000, Bs. As. Publicada en *Acontecimiento* N° 19-20, 2000.
- COPPEDGE, Michael (2000). *Latin American Parties: Political darwinism in the lost decade*, University of Notre Dame, Notre Dame, IN.

- DALTON, Russell J. (2002). *Democracy and its citizens: Patterns of political change*. Mimeo.
- MARCH, J.G. y J. P. OLSEN, (1995). *Democratic Governance*, New York, The Free Press, 1995.
- O'DONNELL, Guillermo (1994). "Delegative democracy", *Journal of democracy*. Vol. 5, (1994), no. 1, páginas 55-69.
- OROZCO, Manuel (2001). Democracia y participación ciudadana", *Instituto Internacional de Gobernabilidad*. Magazine no. 23, 6 de noviembre del 2001.
- PRATS, Joan (2002). Instituciones y desarrollo en América Latina ¿Un rol para la ética?, Instituto Internacional de Gobernabilidad. 17 de septiembre de 2002.
- PRATS, Joan (2001). "Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico", *Instituciones y Desarrollo*, No. 10, Octubre 2001. Barcelona, España. http://www.iigov.org/revista/re10/re10_04.htm.
- RANCIÉRE, Jacques (1996) *El Desacuerdo. Política y filosofía*, Bs. As., Nueva Visión.
- RINESI, Eduardo (2003). *Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo*, Bs. As., Ed. Colihue.
- SANTISO, Carlos (2002). "Promoting Democratic Governance and Preventing the Recurrence of Conflict in Central America: the Role of The United Nations Development Programme in Post Conflict Reconstruction". *Instituto Internacional de Gobernabilidad*, 17 de septiembre de 2002.